

Evaluación del Programa de Estabilidad

ÁNGEL LABORDA

EL PAÍS - NEGOCIOS - Economía - 21-03-2010

En medio de la tormenta desatada a propósito de cómo afrontar el problema de la deuda de Grecia, la Comisión Europea hizo pública esta semana su evaluación de 14 programas de estabilidad presentados por los respectivos Gobiernos para reducir los históricos déficits públicos que ha dejado como herencia esta crisis. La impresión que se puede sacar de estos ejercicios y de su evaluación es que tienen poca credibilidad y mucho de trámite burocrático. Ello pone de manifiesto que el Pacto de Estabilidad no es un instrumento suficiente ni adecuado para coordinar las políticas económicas en el seno de la zona euro, sin lo cual la persistencia de la moneda común está y estará en peligro.

Pero los Gobiernos no quieren ceder ni un ápice de sus competencias fiscales o de otros ámbitos de la política económica. Para los países fuertes de la Unión, los problemas vienen de que hay otros poco serios y despilfarradores que no cumplen el Pacto. Pero esta visión es miope, no se dan cuenta de que hay países que están en una situación fiscal comprometida no por haber sido más despilfarradores que otros, sino porque el impacto de la crisis ha sido asimétrico y ha provocado muchos más daños a su economía, que se reflejan en las cuentas públicas. A su vez, esta asimetría deriva en buena medida de las consecuencias de haberse desenvuelto en unas condiciones monetarias y financieras no controladas por las autoridades nacionales, que eran idóneas para países como Alemania, pero no para otros como España. Pretender ahora, en aplicación del Pacto, que en 2013 todos los países deben situar su déficit por debajo del 3% del PIB, independientemente de si parten de un

déficit del 11,4% (España) o del 3,2% (Alemania), a cualquier estudiante de Economía le parecería una barbaridad. Todo esto encierra una problemática muy rica y con muchos matices a nivel de la teoría y práctica de la política económica en una zona monetaria común, pero que lleva a concluir que hace falta un gobierno económico de la UEM que sea capaz de establecer unas orientaciones y medidas de política económica de obligado cumplimiento para los países.

Centrándonos en España, la Comisión hace una valoración del Programa de Estabilidad que es prácticamente la misma que la que hace para casi todos los demás países: que el escenario macroeconómico es optimista, por lo que el objetivo de que los impuestos aumenten 3,7 puntos porcentuales del PIB hasta 2013 está en el alero; y que no se precisa la estrategia de reducir el gasto público en 4,8 puntos del PIB. En efecto, es harto difícil que una economía sometida a una cura fiscal de la naturaleza propuesta, cuyo sector privado se encuentra en un largo proceso de desapalancamiento (por tanto, con pocas posibilidades de acelerar su gasto en consumo e inversión) y cuyo sector financiero también tiene que desapalancarse, sanear las pérdidas provocadas por la burbuja inmobiliaria y reestructurarse pueda crecer al 3% a partir de mediados del próximo año, cuando ahora aún se hallan en recesión. Un escenario nada pesimista contemplaría crecimientos anuales del PIB ligeramente crecientes, pero sin sobrepasar el 2% hasta 2014.

En dicho escenario, para alcanzar el objetivo de ingresos públicos habría que subir más y de forma significativa los impuestos directos e indirectos, lo que, a su vez, deprimiría más a la economía. Es un círculo vicioso de difícil salida. Por lo que respecta a los gastos, pretender que la reducción recaiga sólo en los de funcionamiento, en la inversión pública y

en los sueldos de los funcionarios, pero sin ni siquiera congelarlos ni ajustar las plantillas, excepto por la vía de sólo cubrir el 10% de las bajas que se produzcan (por cierto, no se dice si esta medida también se tomará en los hospitales, en los colegios, entre el personal de justicia y seguridad), es bastante voluntarista o dañino para el potencial de crecimiento.

En definitiva, estamos en una situación muy complicada, de la que no sé si son plenamente conscientes nuestras clases dirigentes. Tampoco parece que sean conscientes nuestros socios monetarios, quizá porque piensen que los problemas españoles son de los españoles. Ahí está el error, porque los problemas económicos de los españoles son también problemas para la zona euro en su conjunto.